

Iquique, siete de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS:

A folio 1, comparece doña **PAOLA JORQUERA LOPEZ**, abogada, en representación de **ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.**, sociedad del giro de su denominación, ambos domiciliados para estos efectos en Edificio Convenciones S/N, Recinto Amurallado ZOFRI, Iquique; quien deduce demanda de restitución judicial de local por no pago de tarifas en juicio sumario en contra de **IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMERCIAL AUTOMOTRIZ NORTE LIMITADA**, persona jurídica del giro comercial de su denominación, representada por doña **ANTONIETA FRANCISCA COMPODONICO GUERRERO**, factor de comercio, ambos domiciliados para estos efectos en Terreno N° 32-5, Sector D del Barrio Industrial, de la Zona Franca de Iquique.

Fundamenta su demanda señalando que, según consta en contrato privado del 17 de marzo de 2021, la demandada y su representada celebraron un contrato denominado “Convenio de Asignación de Terreno para Almacenaje, Depósito, Exhibición y Venta de Vehículos en el Barrio Industrial”, para la explotación del rubro “almacenaje, depósito, exhibición y venta de vehículos, partes, piezas y/o accesorios”, en el Terreno N° 32-5 emplazado en el sector D del Barrio Industrial, de la Zona Franca de Iquique.

Relata que, con fecha 30 de marzo de 2022, mediante carta N° 512894, la Administración le comunicó el término del contrato a la demandada y fecha de restitución del espacio, lo que debía ocurrir el 12 de abril de 2022 a las 10:00 horas, sin que se diera cumplimiento a la obligación de entrega del terreno.



Indica que, en la cláusula octava del contrato de marras las partes avaluaron anticipadamente y de común acuerdo los perjuicios derivados del retraso en la restitución del local en UF 0,73 por cada día de simple retardo en el cumplimiento de su obligación de restitución, los que se considerarán corridos a partir del término de la asignación.

Señala que en la mentada carta N° 512894 de fecha 30 de marzo de 2022, se le comunicó a la demandada no sólo el término anticipado, sino además la situación de incumplimiento que daba lugar a la terminación anticipada del contrato, por el no pago de la tarifa mensual desde el mes de mayo de 2021, cuyas facturas impagas se cobran judicialmente por la vía ejecutiva.

Invoca los artículos 1437 y siguientes, artículo 1494 y siguientes, 1489 y 1545 y siguientes, todos del Código Civil, así como los artículos 1915 y siguientes, del mismo cuerpo legal.

Por lo anterior, solicita al tribunal que, en definitiva: 1) se condene a la demandada a restituir el Terreno N° 32-5, Sector D, del Barrio Industrial de la Zona Franca de Iquique, libre de todo ocupante y enseres, dentro de tercero día desde que el fallo cause ejecutoria, bajo apercibimiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública; 2) que se condene a la demandada a pagar las tarifas que se devenguen durante la tramitación de este juicio hasta que se efectúe la restitución material o el pago; 3) que se condene a la demandada a la indemnización de perjuicios convencionalmente pactada en el contrato, por no cumplir con su obligación de restituir el espacio, conforme a los perjuicios establecidos en la cláusula octava; 4) que se condene en costas a la demandada.

A folio 11, se celebró el comparendo de contestación y conciliación, con la asistencia de la parte demandante y en rebeldía de la demandada.

Consta que, se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la demandada.

Consta que, se practicó el llamado obligatorio a conciliación, que no prosperó.



A folio 17, se recibió la causa a prueba, la que se modificó a folio 26.

A folio 47, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1 comparece doña **PAOLA JORQUERA LOPEZ**, abogada, en representación de **ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.**, quien deduce demanda de restitución judicial de local por no pago de tarifas en juicio sumario en contra de **IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMERCIAL AUTOMOTRIZ NORTE LIMITADA**, representada por doña **ANTONIETA FRANCISCA COMPODONICO GUERRERO**; y, por los motivos señalados en la parte expositiva de este fallo, solicita al tribunal que, en definitiva: 1) se condene a la demandada a restituir el Terreno N° 32-5, Sector D, del Barrio Industrial de la Zona Franca de Iquique, libre de todo ocupante y enseres, dentro de tercero día desde que el fallo cause ejecutoria, bajo apercibimiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública; 2) que se condene a la demandada a pagar las tarifas que se devenguen durante la tramitación de este juicio hasta que se efectúe la restitución material o el pago; 3) que se condene a la demandada a la indemnización de perjuicios convencionalmente pactada en el contrato, por no cumplir con su obligación de restituir el espacio, conforme a los perjuicios establecidos en la cláusula octava; 4) que se condene en costas a la demandada.

SEGUNDO: Que, en el comparendo de folio 11 se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la demandada.

TERCERO: Que, el artículo 1438 del Código Civil dispone que *“Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”*.

Cabe señalar que las obligaciones que emanan del contrato pueden estar sujetas a diversas modalidades, como el plazo. En este sentido, el artículo 1494 del Código Civil dispone que *“El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación”*, pero, esta definición legal sólo hace referencia a un aspecto de dicha modalidad y, es por ello, que la doctrina ha señalado que el plazo es un



hecho futuro y cierto del cual depende el ejercicio o la extinción de un derecho u obligación.

De acuerdo con el artículo 1080 del Código Civil, el plazo puede ser suspensivo o extintivo, y depende de él, *“el goce actual o la extinción de un derecho”*.

CUARTO: Que el demandante aportó los siguientes elementos de prueba:

Prueba Instrumental:

1) Copia de Convenio de Asignación de Terrenos para Almacenaje, Depósito, Exhibición y Venta de Vehículos en Barrio Industrial; 2) Carta de Aviso de Término de Convenio de Asignación y Restitución de Terreno, de fecha 30 de marzo de 2022; 3) Copia de Acta de Recepción Física de Terreno, de fecha 12 de abril de 2022, que incluye set de 4 fotografías.

Prueba Testimonial:

Que, a folio 34 constan las declaraciones de los testigos Dayanna Andrea González Fonseca y Angie Leissy Contardo Ferruzola.

QUINTO: Que, la parte demandada aportó la siguiente prueba:

Prueba Instrumental:

1) Copia fotostática de boleta de depósito de fecha 7/01/2020 por la suma de \$2.000.000.- a Zofri S.A.; 2) Copia fotostática de boleta de depósito de fecha 7/01/2020 por la suma de \$9.790.000.- a Zofri S.A.; 3) Copia fotostática de boleta de depósito de fecha 23/06/2022 por la suma de \$2.000.000.- a Zofri S.A.; 4) Copia fotostática de boleta de depósito de fecha 6/01/2020 por la suma de \$9.400.000.- a Zofri S.A.

SEXTO: Que, el artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley 2, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 341 de 1977, del Ministerio de Hacienda, sobre Zonas Francas, autorizó el establecimiento de Zonas Francas en Iquique y Punta Arenas, entregándose, mediante Decreto N° 672 del 1990, del Ministerio de Hacienda, la administración de la Zona Franca de Iquique a la Sociedad Zona Franca de Iquique S.A., cuyo



giro principal es promover y facilitar el desarrollo de las operaciones, negociaciones y actividades enunciadas en el artículo 8º de D.F.L. referido y arrendar lotes de terreno para la construcción de edificios, industrias, almacenes, depósitos y talleres destinados a los fines indicados en la misma norma legal.

En el cumplimiento de dichos fines, la sociedad administradora celebra con las personas naturales o jurídicas que deseen operar en el sistema franco, diversas convenciones, como por ejemplo, los denominados “Contratos de Usuarios con Instalaciones Propias”, por medio de los cuales se les autoriza para funcionar como usuarios de la Zona Franca en sitios cuya propiedad se mantiene en el patrimonio de la sociedad administradora, o los denominados “Convenio de Asignación de Terrenos”. En este sentido, el artículo 13 del Decreto con Fuerza de Ley N° 341 de 1977 establece que *“La Sociedad Administradora y los usuarios podrán convenir la utilización de los locales, recintos o predios comprendidos en el área de las Zonas Francas, de conformidad con la ley nacional. Sin embargo, no podrá cederse el uso de la totalidad del área de la Zona Franca en beneficio de un solo usuario.”*

En cuanto a la terminación del convenio de asignación de terrenos.

SÉPTIMO: Que, del estudio de la prueba documental rendida en autos, en especial de la copia del “convenio de asignación de terrenos” acompañado en la demanda, ponderado de conformidad a lo previsto en el artículo 342 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 1700 del Código Civil, hace plena prueba del hecho que el día 17 de marzo del año 2021, Zona Franca de Iquique S.A. (en adelante ZOFRI S.A.), en su carácter de concesionaria del Estado de Chile de la administración y explotación de la Zona Franca de Iquique, celebró un convenio de asignación de terreno con Importadora y Exportadora Comercial Automotriz Norte Limitada, representada por doña Antonieta Francisca Lazara de la Caridad Campodónico Guerrero, autorizándose mediante firma electrónica avanzada de las partes con las fechas 15 de marzo de 2021 y 17 de marzo de 2021; y, en virtud de dicho acto, Zofri S.A. asignó a la demandada el terreno



denominado 32-5 sector D del Barrio Industrial de la Zona Franca de Iquique, para la explotación del rubro de almacenaje, depósito, exhibición y venta de vehículos, partes, piezas y/o accesorios, según se lee de las cláusulas primera y segunda.

En la cláusula tercera, las partes estipularon que el contrato y asignación de uso del terreno de marras, comenzaría a regir desde el 1 de enero de 2017, y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2020, ambas fechas inclusive; y, que vencido dicho plazo, éste no se entendería renovado tácitamente, para lo cual será requisito esencial el acuerdo expreso y por escrito de ambas partes en tal sentido, suscribiendo un nuevo contrato para tales efectos. En este mismo sentido, en la cláusula décimo sexta letra b, las partes pactaron como causales de término del contrato el no pago de la tarifa convenida en forma íntegra y oportuna o del impuesto territorial correspondiente.

Cabe señalar que, del mérito de la cláusula octava, se colige que el usuario estaba obligado a restituir el sitio asignado en el Barrio Industrial en la fecha de término del contrato.

Así las cosas, del estudio de los antecedentes, y en especial de la cláusula décimo sexta letra b) mencionada, es posible colegir que la parte demandada se encontraba obligada a pagar las tarifas convenidas en forma **íntegra y oportuna**, o del impuesto territorial correspondiente, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde a esta última probar no sólo su solución, sino además que esta fue hecha de forma *íntegra*, es decir, haber cumplido con el pago total de lo adeudado; y *oportuna*, es decir, que dicho pago fue realizado en el tiempo y forma dispuestos en el convenio suscrito por las partes.

OCTAVO: Que, en este sentido, la prueba rendida por la parte demandada, consistente en los documentos acompañados a folio 31, a saber, cuatro comprobantes de depósito del Banco Santander-Chile, a la cuenta corriente N° 44-00606-5, de la empresa ZOFRI S.A., documentos que ponderados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 342 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, permiten



establecer la existencia de depósitos de dinero realizados a la cuenta corriente de la demandante, por: José Lira, por la suma de \$2.000.000.-; Jacobo Kravej, por la suma de \$9.790.000.-; y Antonieta Campodonico por las sumas de 2.000.000.- y 9.410.000.-

Que, a este respecto, oportuno parecer dejar asentado que respecto de los comprobantes de depósito realizados por los terceros ajenos al presente juicio, don José Lira y don Jacobo Kravej, con el mérito de los antecedentes del proceso y la escasa prueba rendida por el demandado, no es posible vincular que los depósitos realizados por éstos correspondan a pagos realizados en nombre y representación de la parte demandada, ni que hayan sido con motivo u objeto del pago de las tarifas convenidas en el contrato mentado, motivo por el cual dichos documentos por sí solos no revisten la fuerza suficiente para acreditar el pago, sea total o parcial, de lo adeudado por la demandada a la demandante con ocasión del convenio suscrito e invocado en el presente juicio.

Que, a su turno, en cuanto a los comprobantes de depósito realizados por la representante legal de la empresa demandada, doña Antonieta Campodonico, es prudente destacar que el depósito realizado por la suma de \$2.000.000.- con fecha 23 de junio de 2022 fue realizado con posterioridad a la fecha de la notificación de la demanda, verificada el día 26 de mayo del 2022 (folio 7), por lo que dicho documento no reviste mérito para acreditar el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación de la demanda.

Finalmente, en cuanto al comprobante de depósito restante, por la suma de \$9.410.000.-, realizado con fecha 06 de enero del año 2020, es necesario precisar que el comprobante invocado, ponderado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 342 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, por sí solo no reviste antecedente suficiente para acreditar el pago íntegro y oportuno de las tarifas e impuestos pactados, por cuanto la empresa demandada no ha aportado otros antecedentes que permitan determinar el motivo del depósito, el crédito o derecho personal correlativo que buscaba extinguir, así como tampoco el o los meses de



tarifa(s) que con la suma depositada presuntamente se pagaron.

NOVENO: Que, con todo, debe tenerse presente que conforme el tenor del convenio suscrito entre las partes, la vigencia del contrato invocado comprendía el período entre el 1 de enero del año 2017 y el 31 de diciembre del año 2020, a lo que deben sumarse lo señalado en las cláusulas TERCERA “(...) *vencido el plazo señalado, este no se entenderá renovado tácitamente, para lo cual será requisito esencial el acuerdo expreso y por escrito de ambas partes en tal sentido, suscribiendo un nuevo contrato para estos efectos*”; y SEXTA “(...) *la tarifa mensual deberá ser pagada dentro de los primeros quince días de cada mes, en el domicilio de ZOFRI S.A., oficina de Tesorería, a partir del 1 de enero de 2017*”, cláusulas que permiten desprender dos hechos:

1) Que el convenio de asignación expiró el día 31 de diciembre de 2020, sin derecho a renovación automática por cláusula prohibitiva expresa, de modo que cualquier pago de cuotas posteriores a la del mes de diciembre de 2020 carecería de objeto.

2) Que las tarifas debían ser pagadas el mismo mes que se devengaban, según se extrae del tenor de la cláusula sexta, en lo citado, razón por la cual no existiría una tarifa cuyo pago correspondería al mes de mayo del 2021, ni a cualquiera venidera, toda vez que el contrato habría expirado el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

En este sentido, si bien de la prueba rendida por la parte demandada en estos autos no es posible establecer la existencia de los pagos correspondientes a los meses de mayo de 2021 y siguientes, oportuno aparece precisar que, ceñidos exclusivamente a los términos del contrato y sin contar con antecedentes que permitan conocer a este sentenciador de la existencia de cláusulas ni disposiciones especiales incorporadas por anexos suscritos entre las partes que determinen una fórmula y época distinta del pago de las obligaciones que la demandada contrajo, no es posible tampoco determinar la existencia de obligación de pago de tarifas devengadas durante la existencia del contrato, toda vez que es



la propia demandante la cual tanto en su libelo pretensor como en la carta de aviso de término anticipado explicita que lo reclamado por concepto de deuda corresponde al “no pago de la tarifa mensual desde el mes de mayo de 2021”, fecha en la cual, como se ha razonado, ya no podían devengarse nuevas tarifas, por haber expirado el convenio de asignación suscrito entre las partes de estos autos.

Que la prueba testimonial rendida es conforme en estos hechos, por cuanto la testigo Dayanna Andrea González Fonseca, consultada al punto dos señala “El plazo del contrato fue de 4 años y comenzó su vigencia el 1 de enero de 2017 y finalizó el 31 de diciembre del 2020”, luego, en lo atinente del punto tres, agregó “la demandada no hacía pago de las facturas desde el mes de mayo de 2021”. A su turno, la testigo Anggie Leissy Contardo Ferruzola, consultada al punto dos declaró “Los plazos del contrato tiene una vigencia entre el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020”, testigos legalmente examinadas, sin tachas, contestes en los hechos y sus circunstancias esenciales, que reúnen los requisitos del artículo 384 N°2 del Código de Procedimiento Civil.

Que, concluyentemente, aparece del mérito de los antecedentes aportados por las partes que no ha sido posible acreditar un incumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato, específicamente de la contenida en la cláusula cuarta del convenio de asignación suscrito por las partes con fecha 17 de marzo de 2021, motivos por los cuales no es posible otorgar como fundamento de la restitución del terreno sublite el incumplimiento en el pago de las tarifas mensuales demandadas.

DÉCIMO: Que, asentado lo anterior, no debe obviarse que, del mérito de los antecedentes ya citados en los considerandos precedentes, sí es posible asentar la expiración del convenio de asignación suscrito entre las partes, el cual ocurrió el día 31 de diciembre del 2020, y que, como consta de la carta de término anticipado y del acta de restitución administrativa acompañados por la demandante, ambos documentos ponderados de conformidad a lo dispuesto en el



artículo 342 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, aunados a las declaraciones de los testigos de la parte demandante, ponderadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 384 N° 2 del mismo cuerpo normativo, todos producen plena prueba respecto de la expiración del plazo estipulado, lo que generó el término del convenio suscrito entre las partes; y de la circunstancia de no haberse hecho entrega del terreno por parte de la demandada a la actora, motivos suficientes para acoger la restitución de los terrenos peticionada por la actora, en sintonía con los hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos fijados en los puntos de prueba, en virtud de la cual las partes han ceñido la controversia, además, a la efectividad de haber expirado la vigencia del contrato sublite (punto 3°), correspondiendo acceder a la restitución, según se dirá.

En cuanto a las prestaciones reclamadas.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en cuanto a la tarifas mensuales de uso que se devenguen durante la tramitación del juicio y hasta que se efectúe la restitución material o el pago, del mérito del “convenio de asignación de terrenos” acompañado a folio 1, se colige que en el Convenio de Asignación de Terreno celebrado entre las partes del juicio respecto del sitio subjudice, las partes pactaron en la cláusula sexta que, por ocupar el terreno asignado en el almacenaje, depósito, exhibición y venta de vehículos, piezas y accesorios, el usuario se obligaba a pagar una tarifa mensual que se encuentre vigente al momento de efectuar el pago establecida en el artículo 77 numeral V letra b del Reglamento Interno Operacional, y que a la fecha del contrato ascendía a \$669 pesos por metro cuadrado de terreno, suma que debía pagarse dentro de los primeros 15 días de cada mes; por lo que se tiene por acreditada la existencia de la obligación de la sociedad demandada de pagar una tarifa de uso del terreno.

Que, en cuanto al monto al que ascendía dicha tarifa por uso, se estará a la suma señalada en el contrato de marras, esto es, \$669.- por metro cuadrado de terreno, toda vez que en autos no consta cuáles eran las tarifas mensuales vigentes al momento de efectuar los diversos pagos mensuales, por cuanto las



partes no han incorporado a estos autos el Reglamento Interno Operacional a la que alude la cláusula sexta en estudio. Así, habiendo quedado asentado que el terreno subjudice tiene una superficie de 463,53 m², se concluye que la tarifa de uso asciende a la suma de \$310.101,57.- mensuales.-

En consecuencia, teniéndose por acreditado que la tarifa de uso ascendía a la suma de \$310.101,57.- mensuales, se condenará a la sociedad demandada al pago de las tarifas de uso devengadas desde mayo de 2022, hasta la restitución del terreno, a razón de **\$310.101,57.- (trescientos diez mil ciento un coma cincuenta y siete pesos) mensuales.**

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en cuanto a la indemnización de perjuicios convencionalmente pactada por no cumplir con la obligación de restituir el **espacio**, del mérito del “convenio de asignación de terrenos” y la “carta de término anticipado de convenio”, ambos acompañados a folio 1, ponderados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 342 N° 3 del Código de Procedimiento Civil y conforme a lo asentado en los considerandos precedentes, se colige que en el Convenio de Asignación de Terreno celebrado entre las partes del juicio respecto del sitio subjudice, las partes pactaron en la cláusula octava que, *“en caso que el usuario no restituyere el terreno asignado en el Barrio Industrial en la fecha de término de este contrato o en la fecha indicada en la carta que comunique el término del presente contrato según la cláusula décimo sexta, el usuario se obliga a pagar a ZOFRI S.A., una suma de dinero, a título de indemnización de perjuicios, ascendente a **0,73 Unidades de Fomento** por cada día de simple retardo en el cumplimiento de su obligación de restitución, los que se considerarán corridos a partir del término de la asignación”*; por lo que se tiene por acreditada la existencia de la obligación del demandado de pagar una multa en caso de atraso en la restitución del sitio en la fecha de término del contrato, como evaluación anticipada de perjuicios.

En consecuencia, encontrándose acreditada la existencia de la obligación de pagar una multa en caso de atraso en la restitución del sitio en la fecha de



término del contrato, y habiendo quedado asentado precedentemente que se emitió la carta de comunicación de término anticipado del convenio de asignación entre las partes con fecha 30 de marzo de 2022, fijando día y hora para la restitución el martes 12 de abril de 2022 a las 10:00 horas, conforme lo dispuesto en la cláusula décimo sexta, corresponderá acceder a la demanda respecto de este capítulo, condenando al demandado al pago de una suma de dinero, como valuación anticipada de perjuicios, ascendente a **0,73 UF (cero coma setenta y tres Unidades de Fomento)** por cada día de retardo en el cumplimiento de su obligación de restitución, a contar del 12 de abril del 2022 y hasta la restitución efectiva del sitio, suma que será determinada en la etapa de cumplimiento del fallo, al día de pago efectivo.

DÉCIMO TERCERO: Que la demás prueba rendida en nada altera lo razonado, no siendo necesario su análisis pormenorizado.

DÉCIMO CUARTO: Que, no se condenará en costas a la demandada por haber tenido motivo plausible para litigar.

Por dichas consideraciones, disposiciones legales citadas, y visto lo prescrito por los artículos 1437, 1438, 1494, 1545, 1698, 1702, 1712, 1915 y siguientes, 2211 y siguientes, todos del Código Civil; y los artículos 89, 90, 144, 160, 170, 254, 341, 342, 346, 680 y siguientes, todos del Código de Procedimiento Civil; Decreto con Fuerza de Ley N° 341 de 1977, del Ministerio de Hacienda, sobre Zonas Francas, **SE DECLARA:**

I.- Que, **SE ACOGE** la demanda de restitución de sitio en juicio sumario, interpuesta a folio 1 por doña **PAOLA JORQUERA LÓPEZ**, abogada, en representación de **ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.**, en contra de **IMPORTADORA Y EXPORTADORA COMERCIAL AUTOMOTRIZ NORTE LIMITADA**, representada por doña **ANTONIETA FRANCISCA LAZARA DE LA CARIDAD CAMPODÓNICO GUERRERO**, todos ya individualizados; señalando que el contrato ya se encuentra terminado y en consecuencia, la sociedad demandada deberá restituir el terreno N° 32-5 del sector D del Barrio Industrial de



la Zona Franca de Iquique, dentro de tercero día siguiente a la fecha que este fallo cause ejecutoria, bajo apercibimiento de ser lanzado por la fuerza pública.

II.- Que, se condena a la demandada al pago de aquellas rentas que se devenguen desde el mes de mayo de 2022 en adelante hasta la restitución efectiva del terreno, a razón de **\$310.101,57.- (trescientos diez mil ciento un coma cincuenta y siete pesos) mensuales.**

III.- Que, se condena a la sociedad demandada al pago de una suma de dinero, como valuación anticipada de perjuicios, ascendente a 0,73 UF (cero coma setenta y tres Unidades de Fomento) por cada día de retardo en el cumplimiento de su obligación de restitución, a contar del 12 de abril de 2022 y hasta la restitución efectiva del sitio, suma que será determinada en la etapa de cumplimiento del fallo, al día de pago efectivo.

IV. Que no se condena en costas a la demandada por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1501-2022

Dictada por don **HÉCTOR ANDRÉS KOMPATZKI DELARZE**, Juez Titular de este Primer Juzgado de Letras de Iquique.

Iquique, siete de octubre de dos mil veintidós, hice constar por estado diario la sentencia que antecede, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil.

